

GT 15 "Intervenciones e investigaciones interdisciplinarias y multisectoriales dirigidas a jóvenes en conflicto con la ley penal. Abordajes posibles, abordajes urgentes"

Jóvenes: ¿sujetos de derecho o sujetos de castigo?

De jóvenes con derechos vulnerados a jóvenes en conflicto con la ley penal

Brest Yesica

Yesica.Brest@hotmail.com

Milillo Nadia Aimé

naime.milillo@hotmail.com

Facultad de Trabajo Social – UNLP-

Laboratorio de investigación

Movimientos sociales y condiciones de vida

Introducción

El presente trabajo se basa en una experiencia de práctica de formación profesional realizada en un Centro de Referencia de la ciudad de La Plata durante el año 2014.

El propósito del mismo es analizar algunos puntos relevantes sobre un caso que impactó y movilizó tanto a los profesionales de la institución como al grupo de prácticas, a partir de lo cual se produjeron cuestionamientos respecto de la intervención profesional, y respecto al Estado en términos de insuficiencia de políticas orientadas a la inclusión y acceso a derechos (en términos de salud, educación, vivienda) para mejorar de manera integral las condiciones de vida de los jóvenes.

Consideramos que para realizar el análisis de la situación particular es necesario poner en tensión conceptos como Estado punitivo, cuestión penal, criminalización de la pobreza, igualdad ante la ley/desigualdad en lo real.

Desarrollo

Antes de desarrollar la situación empírica, creemos necesario definir qué entendemos por juventud, como también mencionar algunas características de la institución.

Entendemos a la juventud como una construcción social, resultado de un contexto histórico determinado. Medan (2011) refiere a la juventud como una categoría relacional, entendiendo que será establecida en cada momento histórico y en relación a otras condiciones sociales como la adultez y la infancia. La autora, tomando como referencia a Bourdieu, sostiene que "la juventud es una de las formas en que se presenta la lucha por el poder, en este caso entre unas personas más jóvenes y otras más viejas, que también pueden estar representadas por instituciones".

Entendemos que no es posible definir a la juventud partiendo de adjudicar características específicas o estáticas; sino que esta categoría asumirá diferentes definiciones, valoraciones, significados de una sociedad a otra; e incluso al interior de cada sociedad, se le asignaran diferentes características, sentidos, valoraciones. La juventud, como construcción social, esta atravesada por desigualdades y es objeto de diferentes discursos y prácticas.

Respecto al Centro de Referencia, el mismo es una institución que se constituye a partir de la Ley 13.634, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires. El Centro de Referencia cuenta con tres trabajadoras sociales para todo el departamento judicial que abarca catorce municipios. También participan otros profesionales como psicólogos, abogados y operadores socio comunitarios. Esta institución mencionada aborda medidas alternativas, por ello no es un centro en el que se ejerce la privación de la libertad.

Cuando el joven recibe la condena desde el Centro de Referencia se hace un "seguimiento técnico- profesional" y se diseñan estrategias de abordaje en concordancia con la medida que impone el juez. El joven debe asistir de manera quincenal o semanal "certificando" el cumplimiento con las pautas establecidas; ya sea en relación al cumplimiento de las tareas comunitarias, la concurrencia a la escuela, como así también a otras instituciones que articulan con la institución.

Situación empírica

Hernán es un joven de la ciudad de La Plata, nacido en el año 1997. Al ingresar el oficio de Hernán al Centro de Referencia el día 27 de mayo de 2013, se le dio intervención al equipo de profesionales de la institución (trabajador social, psicólogo, operador y abogado). Este oficio es de un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y está enmarcado en la causa de robo calificado en grado de tentativa. El oficio menciona explícitamente que su fin es “someter a tratamiento” al joven y se le imponen “reglas de conducta en el marco de un juicio abreviado, con una condena de ejecución condicional”. Estas medidas enmarcadas en este oficio son:

- Fijar residencia de la cual no podrá mudarse
- Someterse al control del Centro de Referencia
- Adoptar escolaridad y/o trabajo.

Cabe resaltar que Hernán se encuentra bajo responsabilidad de su hermano, luego de que su madre se fuera de la ciudad. Sin embargo, el joven está en situación de calle junto con un hermano menor. Se vio en una situación difícil y comenzó a hacer changas y limpiar vidrios para poder comer y comprarle regalos a su sobrino. Pasaba las noches en el hospital San Martín. En varios encuentros dentro del Centro de Referencia refirió a estar cansado de su situación, relacionando la situación de calle con el ingreso al “mundo delictivo” al que se vincula desde los 10 años. Dejó la escolaridad en el 5to grado de la escuela primaria.

La trayectoria de vida de Hernán está profundamente atravesada y marcada por la institucionalización punitiva. En 2011 el servicio local le dio intervención a una comunidad terapéutica, al mes este dispositivo deja de intervenir por decisión de Hernán. Durante el año 2013 ingresa un oficio por robo al Centro de Referencia indicando la intervención, sin embargo ingresó a un centro cerrado de la ciudad. En febrero de 2014 ingresa nuevamente un oficio de un Juzgado de Garantías, por intervención al Centro de Referencia, en marzo ingresa a un centro cerrado ; en abril es trasladado a Centro de Recepción, y el 27 de mayo se “reintegra” a la familia y se le asigna intervención del Centro de Referencia.

Es necesario destacar que los niños comienzan a ser objeto de intervención porque se convierte en un “niño peligroso”, lo que estaría obstaculizando el status quo capitalista. Así se entiende que este niño es un potencial infractor de la ley, y al imponerle la medida,

los jueces no diferencian las particularidades que atraviesan al joven, sino que se le imponen a igual medida reglas de conducta.

Asimismo, la pena es la oportunidad para que el sujeto pueda arrepentirse, esta relacionada a la idea de reparar el daño, pero también es una estrategia para prevenir el delito, y se instala para demostrar a la sociedad que el pacto social funciona. Y en el caso expuesto las medidas socioeducativas o laborales buscan aportar a la cultura del trabajo, por lo cual son medidas funcionales al sistema capitalista, porque pretenden mantener el orden, reencausar al joven en el mundo del trabajo. Esta pretensión es acompañada de adecuar al sujeto al sistema y a las normas sociales.

El marco de este trabajo es la situación empírica desarrollada, ya que nos permite analizar la relación contradictoria entre la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 13.298 y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N° 13.634, entendiendo que los jóvenes que ingresan en la segunda legislación quedan inmediatamente por fuera de la protección integral de los derechos. En esta línea, el Estado se hace visible al momento de la intervención punitiva, como ocurre en la trayectoria de vida de Hernán, y no en la restitución de derechos. De esta manera, se debe considerar que se comienza a actuar sobre las vulneraciones cuando el joven rompe un sistema que lo excluyó.

Recordemos que las primeras formas de conocimiento criminológico se desarrollan en el momento en que la clase burguesa conquista el poder político asumiendo el papel de clase dominante. La acumulación del capital en manos de pocos despoja de los medios de producción a las masas productoras.

Así, se buscan modos de preservar y garantizar el control social en el nuevo orden. Se refunda el derecho de castigar y las formas de su ejercicio sobre la base de las nuevas libertades burguesas (Pavarini, 2003).

Sin embargo, la primera condición para la organización política pueda desarrollarse es que los excluidos de la propiedad acepten las reglas del juego como naturales. En esta lógica surge la estrategia de control y disciplinamiento en relación con la “desviación criminal”. Así se entiende que el pacto social deberá disciplinar las relaciones sociales de propiedad, en esta desigual distribución de la propiedad. De esta forma, se encuentra una contradicción entre la igualdad ante la ley y una distribución desigual de la propiedad. Al mismo tiempo, como efecto de la desgarradora contradicción entre principio de igualdad formal y distribución clasista de las oportunidades, la acción criminal está

políticamente considerada como propia de los excluidos de la propiedad y, por lo tanto, como atentado al orden y a la paz de los poseedores.

“La necesidad política de afirmar una racionalidad igual de los hombres se diluye en la igual advertida necesidad de definir en términos de estigma, como distinto, como otro, al enemigo de clase” (Pavarini, 2003: 35).

Así, la cuestión penal es reducida a un problema de patología individual, la reacción social respecto de la criminalidad pierde todo carácter problemático: el aparato represivo es de cualquier modo y siempre legitimado. Su fundamento no es ya político, sino “natural”.

De esta manera, el derecho nunca ha tenido como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Por el contrario, la voluntad del Estado a través de su producción normativa apunta a beneficiar a las minorías que se aprovechan de la explotación de las mayorías (D’auria y Venier, 2005). La justicia esta colonizada por el capitalismo, por ello se centra en el delito a la propiedad privada y se reprende a quienes irrumpen en este sistema.

Para comprender esta contradicción es necesario interpelar algunas cuestiones relacionadas al Estado punitivo en su doble función como garante de derechos y su mano punitiva.

El neoliberalismo es un momento clave en donde se muestra un borramiento del Estado económico, debilitamiento del Estado social y un fortalecimiento del Estado penal. Esto refiere a un nuevo sentido común penal que apunta a criminalizar la miseria, junto a la ideología económica y social basada en el individualismo y la mercantilización, considerando que las causas del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de las condiciones sociales.

Wacquant (2000) expresa que se pondera mas Estado en el plano social y penal, pero con la condición de que ese aspecto social funcione como un elemento penal disfrazado, instrumento de la vigilancia y disciplina. Así es que en los Estados donde se ha renunciado a crear empleos, en lo sucesivo se construirán instituciones para endurecer la intervención penal.

El objetivo central de este cambio de posicionamiento por parte del Estado es calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos. *“El Estado debía actuar con severidad frente a los desórdenes y liberar a ese mismo estado de sus responsabilidades en la génesis social y económica de*

la inseguridad” (Wacquant, 2000:33). Lo que se constituyó en una guerra contra los pobres y marginales.

El principal blanco de estas políticas de seguridad son los jóvenes integrantes de clases populares, provenientes de familias expulsadas a los márgenes del mercado laboral. Así se creía que el Estado debe volver “a tomar en sus manos a los pobres y corregir los comportamientos mediante la reprobación pública y las sanciones penales”. De ello resulta, una sobrecondena firme de punición para los individuos marginados del mercado laboral.

En este sentido, Baratta (2004) plantea que

“La selectividad del sistema penal en el reclutamiento de su propia clientela, consistente en individuos pertenecientes a las clases sociales más bajas, no depende únicamente del hecho de que el sistema refleja y reproduce en situaciones de desigualdad existentes en una sociedad, sino que también tiene un origen estructural” (Baratta, 2004:301)

De esta manera, podemos concluir que el Estado Punitivo presenta un doble rostro: por un lado, debería ser un Estado garante de derechos; y por el otro, es un Estado que ejerce un poder punitivo. Como podemos relacionar con el caso seleccionado, el Estado está presente principalmente para punir, para controlar nuestras acciones y mantener un orden social determinado. En este sentido, su principal objetivo no es garantizar los derechos de los jóvenes, sino controlarlos, constituirlos en sujetos de castigo, con procesos de encadenamiento a sujeciones punitivas (Daroqui, López, Cipriano García, 2012), como son los discursos y prácticas policiales, judiciales y carcelarias.

Estos aspectos, disimiles entre sí, hacen alusión a una importante hipocresía haciendo referencia a que en este Estado están en juego dos legislaciones, en las que se consideran a los jóvenes como sujetos de derechos, pero, paralelamente y en mayor medida, son sujetos punibles. Al momento en que el joven ingresa en la legislación de la Responsabilidad Penal Juvenil, queda por fuera de la Protección Integral de Derechos. Esto ocurre principalmente con los jóvenes pobres, que son continuamente hostigados por la institución policial. Efectivamente, un 80 % de casos que ingresan al Centro de Referencia son de jóvenes en situación de vulnerabilidad. De esta manera, debemos continuar cuestionándonos por la criminalización de la pobreza.

A manera de conclusión

Como hemos analizado a lo largo del trabajo a través de la historia de vida de Hernán, el Estado permanece ausente y sin acción cuando se trata de promoción y protección de derechos de nuestros jóvenes; sin embargo al momento de ejercer una acción punitiva, se hace visible su intervención. Este Estado desplegando su doble rostro, ejerce con más ímpetu el de la punición.

De esta manera, sus engranajes funcionan a través de rutinas represivas y cotidianas de las distintas fuerzas del orden. El Estado va creando su clientela punitiva compuesta por cientos de jóvenes que no van a ser encerrados en cárceles en un primer momento, sino que van a empezar a transitar por un camino plagado de pequeñas intervenciones anteriores a la formación de una causa penal, como la detención por averiguación de identidad, últimamente en boga, que es una forma de castigo sustituto. Castigos que se replican diariamente, formas de control social, de registros de datos. Esos primeros procedimientos van generando imágenes y luego van contribuyendo a la construcción de una etiqueta sobre determinadas personas como miembros de la clientela punitiva. Esta penalización de la pobreza remite a la selectividad del sistema penal.

El rostro punitivo del Estado, se manifiesta a través de diferentes discursos y prácticas. Es posible tomar como referencia la discusión respecto a la edad de imputabilidad que, en diferentes momentos y respondiendo a determinados intereses, ha sido impulsada y ha ocupado un lugar central en la agenda gubernamental. En el contexto actual, a partir del debate propuesto por sectores del gobierno, múltiples actores se han posicionado a favor o en contra frente a la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Entendemos que en un momento donde la sociedad demanda al gobierno mayor seguridad, es estratégico colocar en el centro del debate dicha discusión. Sin fundamentar el análisis, el castigo a jóvenes se presenta como la medida más apropiada y necesaria.

Los discursos en torno a la baja de la edad de imputabilidad dan cuenta de un campo en tensión y disputa; y dentro del mismo las perspectivas y posicionamientos que los diferentes actores han construido, la concepción de sujeto, cómo lo reconocen (menor/niño; víctima/victimario), qué lugar le asignan (sujeto de derecho/sujeto tutelar), y cómo se define a la infancia (en peligro/peligrosa).

En este sentido, nuestro desafío como trabajadores sociales es superar las visiones fragmentadas, para ello debemos analizar las problemáticas entendiendo sus múltiples atravesamientos. Asimismo, debemos sobrepasar la apariencia de los fenómenos como problemas jurídicos, reconociendo su contenido social y político, por ello es sumamente

necesario constituir espacios adecuados para revisar nuestras intervenciones, construyendo elementos que nos aporte a un pensamiento crítico sobre nuestro accionar profesional fortaleciendo la perspectiva de derechos.

Bibliografía

Baratta, A. (2004) *Criminología y sistema penal*. Compilación in memoriam. Buenos Aires: Editorial B de F.

D'Auria A. y Venier C (2005) (coords.), *Derecho y política*. La Ley: Buenos Aires.

Daroqui, A. Lopez, A. Cipriano Garcia, R. (2012) *Sujetos de castigo. Hacia una sociología de la penalidad juvenil*. Rosario: homo sapiens ediciones.

Medan, M. (2011) "Sociabilidad juvenil masculina y riesgo. Discrepancia y acuerdos entre un programa de prevención del delito juvenil y sus beneficiarios". Última Década N° 35, CIDPA VALPARAISO. PP 61-87.

Pavarini, M. (2003) *Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*. Siglo veintiuno editores Argentina: Buenos Aires.

Wacquant, L. (2000) *Las cárceles de la miseria*. Buenos Aires: Manantial.

Wacquant, L. (2009) *Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona: Gedisa editorial.